


MARIANA CAMPOS

Fortalecer a los municipios para contrarrestar al crimen

En los días previos a los asesinatos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y Bernardo Bravo, líder limonero, la narrativa oficial del gobierno federal insistía en proyectar —con base en datos anómalos— el progreso sostenido en la seguridad del país. Reducciones del 28% en feminicidios y en lesiones por arma de fuego, 69% en secuestros y 48% en robos con violencia; se registraban 27 homicidios menos al día.

No obstante este relato, las ejecuciones de Manzo y Bravo desmienten la versión oficial y simbolizan al Estado disuelto a nivel local. Ambos líderes desafiaron abiertamente a las organizaciones criminales que, en Michoacán, establecen las reglas del juego a nivel político, económico y social, asumiendo el control total de los territorios.

El asesinato de 40 alcaldes en fun-

ciones, registrados de diciembre de 2017 a la fecha, sumado al de decenas de funcionarios, empresarios y líderes sociales, evidencia el avance de regímenes criminales que se expanden sobre el vacío institucional.

Ni dictadura ni control: el desgobierno criminal

Se ha señalado que el régimen de Morena conduce a una dictadura debido a las enmiendas constitucionales que han eliminado contrapesos al Ejecutivo en el ámbito federal: la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos, la erosión de la Ley de Amparo, la militarización. Y es cierto, estos cambios concentran poder político. Pero una dictadura exige control: un mando único, centralizado, capaz de imponer su voluntad en todo el territorio. Eso es lo que hoy no existe.

El país está fracturado en zonas

donde el crimen impone reglas, administra justicia, cobra impuestos y decide quién puede ser alcalde o empresario. En lugar de un régimen totalitario, enfrentamos múltiples regímenes criminales a nivel local —dispersos y rivales— que ejercen poder político y económico con autonomía fáctica. Los grupos criminales no buscan derrocar al Gobierno: lo suplantán.

Recomendaciones para un Estado reconstituido

La raíz del problema no reside únicamente en la violencia, sino en el diseño institucional fallido del municipio mexicano. Sin gobiernos locales fuertes, no hay Estado posible. Urge dotar a los municipios de sostenibilidad fiscal, atribuciones reales y capacidad operativa. Es preciso desarticular las economías criminales e identificar los sectores capturados para crear cadenas productivas verificadas, libres de extorsión, con trazabilidad y monitoreo internacional. Se requiere recuperar la inteligencia civil, y mejorar las condiciones laborales de las policías locales, profesionalizarlas y equiparlas. Es necesario garantizar autonomía y ges-

ción efectiva en las fiscalías, y optimizar la coordinación entre órdenes de gobierno.

Por último, es crucial proteger a quienes resisten mediante un mecanismo federal e internacional de protección para alcaldes, empresarios y líderes sociales bajo amenaza. Esto conlleva reactivar la participación ciudadana con redes locales de vigilancia, transparencia y denuncia frente a la cooptación criminal.

El desafío es reconstruir el poder desde lo local

Ya podemos afirmar que el debilitamiento de los contrapesos institucionales, impulsado por el gobierno de Morena, ha facilitado el ascenso de los regímenes criminales. Las organizaciones delincuenciales gobiernan mejor sin frenos ni equilibrios, y con un Estado de derecho debilitado.

Mientras discutimos si México avanza hacia una dictadura, el verdadero poder se consolida fuera del Estado. Las muertes de Carlos Manzo y Bernardo Bravo seguirán recordándonos que el crimen no solo desafía al Estado mexicano: quizás ya lo reemplazó. ●

Director general de México Evalúa